CONGRESO DE LA REPÚBLICA
ÁREA DE TRAMITE Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
06 OCT. 2022
RECIBIDO
Firma: Hora: 9:53

DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 1418/2021-CR, POR EL QUE SE MODIFICA EL LITERAL E) DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 27336, LEY DE DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y FACULTADES DE OSIPTEL.

COMISIÓN DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2021 – 2022

DICTAMEN

Señor Presidente:

Ha sido remitido para dictamen de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, de conformidad con el artículo 107 de la Constitución Política del Perú y el artículo 67 del Reglamento del Congreso de la República, el **Proyecto de Ley 1418/2021-CR**, presentado por el grupo parlamentario **Alianza Para el Progreso**, a iniciativa de la congresista **MAGALY RUÍZ RODRÍGUEZ**, por el que se propone modificar el literal e) del artículo 16 de la Ley 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL para obligar a las personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos de telecomunicaciones a conservar por un período mínimo de siete (7) años los registros de llamadas y facturación de los servicios que explota..

I. Situación procesal

I.1 Antecedentes procedimentales

El **Proyecto de Ley 1418/2021-CR**, fue presentado en el Área de Trámite Documentario el 07 de marzo de 2022, siendo recibido en la Comisión de Transportes y Comunicaciones el día 10 de marzo de 2022, como única comisión para su estudio y dictamen.

El presente dictamen fue **aprobado por mayoría** de los congresistas presentes, en la cuarta sesión ordinaria semipresencial, realizada el día miércoles 21 de setiembre de 2022, con los votos favorable de los siguientes congresistas: Aragón Carreño, Salhuana Cavides, Amuruz Dulanto, Bellido Ugarte, Gutiérrez Ticona, Montalvo Cubas, Paredes Piqué, Ruíz Rodríguez, Wong Pujada, Yarrow Lumbreras y Zeballos Aponte. Votaron en abstención: Olivos Martínez, Jiménez Heredia, Medina Minaya, Obando Morgan y Revilla Villanueva. No hubo votos en contra.

II. Contenido de la propuesta legislativa

El contenido de la propuesta legislativa presentado en el proyecto de ley original está enfocado en modificar el literal e) del artículo 16 de la Ley 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL, para obligar a las personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos de telecomunicaciones a conservar por un período mínimo de siete (7) años los registros de llamadas y facturación de los servicios que explota.

La fórmula legal originariamente propuesta es la siguiente:

> *"**Artículo 1°.- Objeto de la ley***
> *El objeto de la ley es obligar a las personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos de telecomunicaciones conservar por un periodo mínimo de 7 (siete) años los registros de llamadas y facturación de los servicios que explota.*
>
> ***Artículo 2°.- Modificación del literal e) del artículo 16 de la Ley 27336, ley de desarrollo de las funciones y facultades del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL.***
>
> *Modifíquese el literal e) del artículo 16 de la ley 27336, bajo los siguientes términos:*
>
> *"Artículo 16.- Obligaciones de las entidades supervisadas*
>
> *Las entidades supervisadas se encuentran obligadas a:*
>
> *(...)*
>
> *e) Conservar por un periodo de al menos **7 (siete)** años después de originada la información realizada con la tasación, los registros fuentes del detalle de las llamadas y facturación de los servicios que explota y con el cumplimiento de normas técnicas declaradas de observancia obligatoria en el país por una autoridad competente, o de obligaciones contractuales o legales aplicables a dichos servicios.*
>
> *(...)."*

III. Marco Normativo

III.1 Legislación nacional

- Constitución Política del Perú.
- Reglamento del Congreso de la República.

- Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
- Ley 27783 Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
- Ley 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- Ley 26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa.
- Ley 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL.
- Decreto Legislativo N° 702, que declara de necesidad pública el desarrollo de telecomunicaciones y aprueba normas que regulan la promoción de inversión privada en telecomunicaciones.
- Decreto Supremo N° 013-93-TCC, Texto Único Ordenado de la "Ley de Telecomunicaciones".
- Decreto Legislativo N° 957, Decreto Legislativo que promulga el nuevo Código Procesal Penal.

IV. Análisis de la propuesta legislativa

IV.1 Análisis técnico

Como se puede analizar de la lectura del proyecto de ley, el objetivo de la iniciativa legislativa ahora evaluada es la siguiente: la modificación del inciso e) del artículo 16 de la Ley 27336, Ley de desarrollo de las funciones y facultades del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), con la única finalidad de modificar el plazo de conservación previsto por la obligación de las entidades supervisadas por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) de conservar los registros de llamadas y facturación de los servicios que explotan de un periodo mínimo de 3 (tres) años por uno de 7 (siete) años, debido a la importancia de estos datos en las investigaciones realizadas por la Policía Nacional y el Ministerio Público, además de en la solución de los casos que llevan a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial.

No queda duda de que el Congreso de la República tiene facultad para emitir iniciativas legislativas correspondientes al sector de telecomunicaciones. Debemos indicar que nuestra Constitución reconoce varios derechos que se materializan a través del uso de los mismos, tanto para motivos personales, profesionales, académicos y otros. Quizás el más importante de todos sea el derecho a la libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento reconocido en el inciso 4 del artículo 2 de la Constitución:

> *"Toda persona tiene derecho: (...) a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley".*

Igualmente, este derecho se reconoce en diversos instrumentos internacionales, tales como el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

En igual sentido, el artículo 3 del Decreto Supremo N° 013-93-TCC reconoce el derecho legal de toda persona a utilizar los medios de telecomunicaciones al indicar que "*toda persona tiene derecho a usar y prestar servicios de telecomunicaciones en la forma señalada por las disposiciones que regulan la materia*".

Como ha indicado la Defensoría del Pueblo, el derecho a la libertad de expresión es un derecho fundamental muy importante en un país con sistema democrático:

> *"La libertad de expresión es un derecho fundamental cuya vigencia se encuentra estrechamente vinculada al funcionamiento de una sociedad pluralista, que constituye la base de todo sistema democrático. En ese sentido, la libertad de expresión no sólo encuentra su fundamento en la dignidad del ser humano, en tanto posibilidad de comunicar hechos –que incluye la búsqueda de información, que caracteriza al periodismo de investigación– sino también ideas u opiniones. Además, la libertad de expresión constituye un elemento esencial para la vigencia del sistema democrático, al permitir el intercambio libre y plural de información entre los ciudadanos y ciudadanas, favoreciendo su participación informada en los asuntos públicos y los mecanismos de fiscalización social, que contribuyen a una mejor rendición de cuentas de los asuntos de interés público."*[1].

Como indica Arrieta, la relación de la libertad de expresión y las telecomunicaciones es vital, así establece lo siguiente:

> *"Hoy en día, el ejercicio de la comunicación comprende tanto la expresión escrita como la oral e incluso telecomunicacional, por cuanto el desarrollo de las nuevas TIC ha permitido el advenimiento de nuevos medios para el ejercicio de este derecho*

[1] DEFENSORIA DEL PUEBLO – "Situación de la Libertad de Expresión en el Perú. Septiembre 1996 – Septiembre 2000" [Informe defensorial N° 48]. Lima: Defensoría del Pueblo, 2000, p. 122.

humano fundamental, particularmente a partir del desarrollo intenso que han tenido las telecomunicaciones en las últimas décadas"[2].

De igual forma, la Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en los expedientes acumulados N° 0012-2018-PI/TC y N° 0013-2018-PI/TC, de fecha 11 de octubre de 2018, ha indicado que la libertad de expresión está relacionada a los medios de comunicación:

> *"(…) la libertad de expresión no se limita al ámbito privado, sino que resulta esencial para que una persona pueda hacer públicas sus ideas y opiniones, si tal es su deseo. Ello requiere de vehículos que no son otros que los medios de comunicación"* (Resaltado propio, fundamento 169).

También, el Tribunal Constitucional ha indicado en la misma Sentencia antes referida que la libertad de información no sólo es un derecho subjetivo, sino que tiene una perspectiva colectiva:

> *"Efectivamente, la libertad de información no es solo un derecho subjetivo con consecuencias únicamente para la persona que emite un determinado mensaje. Se trata también de un derecho que tiene un impacto en el resto de la sociedad, puesto que puede enriquecer el debate y el consecuente intercambio de ideas en la opinión pública. De este modo, una restricción a la libertad de información, ya sea en su dimensión individual o colectiva, tiene también un impacto en el funcionamiento del sistema democrático.*
>
> *(…) En el fundamento 11 de la Sentencia 0905-2001-AA/TC este Tribunal ha desarrollado la perspectiva individual, pero también la perspectiva colectiva de la libertad de información, que garantiza:*
>
> > *(...) el derecho colectivo de ser informados, en forma veraz e imparcial, protegiéndose de ese modo el proceso de formación de la opinión pública, en consecuencia, no sólo al informante, sino también a todo el proceso de elaboración, búsqueda, selección y confección de la información.*
>
> *(…) La combinación de estas dos dimensiones ha permitido que el Tribunal considere que la libertad de información (y la de expresión) sean consideradas garantías institucionales del sistema democrático (Sentencia 0015-2009-PPTC,*

[2] ARRIETA, Miguel - "Libertad de expresión y derecho a la información en las redes sociales en Internet", en: Revista Derecho, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías, N° 12. Bogotá: Universidad de los Andes, 2014, p. 5.

fundamento 3). Es decir, sin estas libertades o sin su adecuada protección, el sistema democrático se empobrecería." (Resaltado propio, fundamentos 54-56).

Lo indicado hace referencia no sólo a las expresiones escritas, orales o virtuales privadas, realizadas por medios de telecomunicación, sino que incluso se hace referencia a las formas de expresión, opinión e información realizadas a través de medios de comunicación como radios, canales de televisión, páginas web, redes sociales, blogs, bitácoras, foros, entre otros.

Igualmente, sólo hemos mencionado los derechos a la libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento; no obstante, los medios de comunicación y telecomunicación, específicamente, permiten la garantía de diversos derechos fundamentales de los cuales son titulares los peruanos y extranjeros en nuestro territorio, como lo son el derecho a la educación, el derecho de acceso a la cultura, el derecho al trabajo, el derecho a la reunión, el derecho de participación individual o colectiva en la vida política del país, el derecho a impartir educación, entre otros.

De conformidad con lo antes mencionado, el Congreso de la República se encuentra legitimado válidamente, según la Constitución y las normas vigentes, para la emisión de normas en materia del sector telecomunicaciones, no sólo por sus funciones atribuidas por el ordenamiento jurídico, sino también para garantizar y promover el cumplimiento de derechos fundamentales.

Ahora bien, ningún derecho está aislado, e indicamos ello porque, en este caso, se trata de una iniciativa legislativa que busca resguardar otro derecho fundamental, que se ha denominado por la doctrina moderna como un derecho de justicia[3]: la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso.

En muchos casos, las circunstancias que revisten las llamadas telefónicas sirven para que los Fiscales puedan realizar sus investigaciones penales, así como para que los Jueces y Magistrados puedan resolver los casos judiciales en materia penal, o en cualquier otra materia que tenga instancia probatoria.

La presente iniciativa legislativa tiene por objeto modificar la Ley 27336, Ley de desarrollo de las funciones y facultades del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), en un apartado específico: aquel que señala obligaciones para las empresas supervisadas, más específicamente, la obligación de mantener los registros fuentes del detalle de las llamadas y facturación de los servicios que explotan.

---

[3] DIAZ, Juan – "Derechos de Justicia". Lima: Palestra, 2021.

Textualmente, el proyecto de ley presentado indica lo siguiente:

"El inciso 10) del Artículo 2 de la Constitución Política del Perú, protege el secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones, el mismo que sólo puede ser limitado por orden motivada de juez competente. Al respecto, la doctrina considera que la protección de este derecho radica en la tutela que merece en forma extendida el derecho a la intimidad, por ello que, cualquier afectación al mismo sólo podría obedecer a la autorización del titular o por orden judicial al existir un interés de la sociedad, como por ejemplo la investigación del delito. El secreto de las comunicaciones y telecomunicaciones no es absoluto.

El OSIPTEL es el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, creado mediante decreto legislativo 702 del 11 de julio de 1991, contando con autonomía en tanto no se encuentra sujeto en su actuación funcional a mandato imperativo de ningún otro órgano o entidad del Estado, la misma que está encargada de regular el comportamiento de las empresas operadoras así como las relaciones de dichas empresas entre sí, de garantizar la calidad y eficiencia del servicio brindado al usuario y de regular el equilibrio de las tarifas, conforme al artículo 79 de su norma de creación.

El 05 de agosto de 2020, es publicada la Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL, Ley 27336; que establece los objetivos de la misma definiendo y delimitando sus facultades para supervisar y sancionar a las personas naturales o jurídicas que prestan servicios públicos de telecomunicaciones, en lo que respecta a su competencia; así como, establece las instancias competentes para los respectivos procedimientos administrativos

La ley mencionada concordante con la constitución, señala que ninguna autoridad competente puede acceder a información protegida, salvo la que sea necesaria para cumplir con su facultad de fiscalización.

***De la misma manera señala las obligaciones de las entidades supervisadas**; es decir, las personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos de telecomunicaciones, entre los cuales se advierte una que está ligada directamente con la protección de derechos de los usuarios y también con la investigación del delito; por lo cual, estas entidades **están obligadas a conservar por un período de al menos 3 (tres) años después de originada la información realizada con la tasación, los registros fuentes del detalle de las llamadas y facturación de los servicios que explota**; conforme al literal e) de su artículo 16.*
***La delincuencia en la sociedad**.*

Debido al contenido de los datos e información que este derecho guarda, con el avance de la tecnología en las telecomunicaciones y la masificación de las comunicaciones por aparatos móviles o teléfonos celulares, la privacidad de los mensajes que se transmiten por este medio son utilizados como una herramienta para la comisión de diferentes delitos; y como contraparte, su legal intervención es una técnica fundamental en la lucha contra la delincuencia común y organizada, conforme a las reglas del Decreto. Legislativo. 957, Código Procesal Penal en adelante CPP.

Ante la comisión delictiva, el Ministerio Público es el llamado para conducir desde su inicio la investigación del delito, conforme lo señala la constitución; recurriendo al levantamiento de las comunicaciones y telecomunicaciones conforme a las reglas del CPP concordado con la Constitución Política del Perú. El requerimiento fiscal debe ser aprobado por el juez de investigación preparatoria quien ordenará entre el levantamiento del secreto de las comunicaciones del sujeto activo del delito o del titular de un número telefónico vinculado a un hecho criminal[4], permitiendo conocer ***la información que están registrada en las bases de datos de las empresas de telefonía, las mismas que por ley pueden estar almacenadas por un mínimo de tres años como se ha mencionado en el párrafo 1.5;*** *luego del cual pueden ser eliminados; es decir, perjudicando a las investigaciones a cargo del Ministerio Público en las investigaciones que por sus características tienen plazos más largos para su procesamiento.*

El problema detectado

Al respecto, el plazo de 3 años es insuficiente cuando se trata de:

> *Investigaciones contra altos funcionarios públicos designados en el artículo 99 de la Constitución; es decir, contra el Presidente de la República; los representantes a Congreso; los Ministros de Estado; los miembros del Tribunal Constitucional; los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; los vocales de la Corte Suprema; los fiscales supremos; el Defensor del Pueblo y el Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones.*
>
> *Conforme a la Constitución Política del Perú, el Ministerio Público no puede accionar en forma directa contra aquellos que tienen la prerrogativa del antejuicio, la misma que dura hasta 5 años después de haber dejado el cargo; es decir, mientras ellos estén dentro de este plazo es necesario que el Pleno del Congreso de la República apruebe*

[4] Es necesario mencionar que la remisión del registro de llamadas entrantes y salientes (tráfico de llamadas) es parte de la información contenida.

la decisión de acusar al funcionario para que la denuncia pueda ser formalizada de acuerdo al artículo 450 del CPP.

Excepción es el caso del Presidente de la República a quien sólo se le podrá acusar durante su mandato por traición a la patria; impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134° de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral, tal como lo establece el artículo 117 de la carta magna.

En estos casos, de acuerdo al segundo párrafo del literal i) del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, la decisión de acusar constitucionalmente merece un acuerdo de la mitad más uno del número de miembros del Congreso, sin participación de los miembros de la Comisión Permanente; ergo, ***sin acuerdo, no se procede con la acusación y por lo tanto no es posible formalizar la investigación****. Es decir, la decisión política prima, y por lo tanto una negativa para la investigación podría ocasionar el retardo en los actos de averiguación de la verdad y, por consiguiente, la demora en la recolección de datos pertinentes como los relativos al secreto de las comunicaciones. Por ello, consideramos que es necesario establecer un plazo de resguardo de los datos que supere al menos el periodo de estos funcionarios, es decir 5 años[5], a cuyo término con el ingreso de nuevos actores políticos pueden autorizar la investigación.*

Investigaciones por delitos perpetrados por imputados integrantes de organizaciones criminales, personas vinculadas a ella o

---

[5] Al respecto cabe precisar que, según la norma procesal penal, señala que el proceso penal contra los funcionarios públicos señalados en el artículo 99 de la Constitución Política se desarrollará bajo las reglas del proceso común, salvo las especiales que establezca la ley; y continua, señalando que el acto de formular acusación del Congreso de la República permitirá a la Fiscalía de la Nación formalizar la investigación preparatoria ante la Sala Penal de la Corte Suprema. Entonces. si realizamos una interpretación armónica del CPP es posible afirmar que no existe impedimento para que en estos casos pueda realizarse las diligencias preliminares para realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión (Inc 2 del Art. 330 del CPP); en la cual podría requerirse los datos relativos al secreto de las comunicaciones como el registro de llamadas. **Sin embargo, esta posibilidad ha sido desechada por la Fiscalía de la Nación en tanto en investigaciones contra el presidente de la Republica Pedro Castillo Terrones resuelve investigarlo preliminarmente; pero, suspende el inicio de los actos de investigación hasta la culminación de su mandato presidencial en virtud de la interpretación que ellos realizan del artículo 117 de la Constitución Política**.

que actúan por encargo de la misma, en tanto el plazo de la investigación preparatoria es de treinta y seis meses, la misma que puede ser prorrogada por un plazo similar (Inc. 2 del Art. 342 del Decreto. Legislativo. 957); es decir, que podría durar hasta 6 años, tiempo en el cual podría surgir nuevos investigados de quienes no se tenía conocimiento en un inicio y por lo tanto la afectación de su derecho del secreto de las comunicaciones proporcionaría datos a la investigación; sin embargo, dicha medida sería inútil en tanto por el plazo legal de 3 años descrita en párrafos anteriores, las empresas de telefonía ya habrían eliminaron la data. En muchos casos los delitos se descubren muchos años después de haber sido ejecutados, complicando él acopio probatorio del Ministerio Público.

La propuesta de solución

La ampliación del plazo conservación de los registros a los que se refiere el literal e del artículo 16 de la ley 27336 resulta necesaria en tanto permitirá mantener por más tiempo esos datos que podrían servir en las investigaciones que realice el Ministerio Público, en tanto los tres años que actualmente contempla la norma no son concordantes con las situaciones descritas (…).

***El plazo mínimo propuesto es de 7 (siete) años**, en tanto se toma como referencia el plazo de 5 años de los congresistas y presidente de la República que por motivos políticos subjetivos o interpretativos legales puede cumplirse sin una acusación constitucional, imposibilitando que se realicen las diligencias preliminares y por consiguiente la obtención de los datos referidos al derecho antes citado, al cual se le añade 2 años adicionales en los que razonablemente, nuevos actores políticos, podrían autorizar la investigación, teniendo el Ministerio Público ese plazo para poder requerir la información que considere necesaria bajo el principio de objetividad. No debemos olvidar que bajo la ley procesal penal actual, esta información también puede ser empleada como un elemento de descargo.*

En el caso de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público contra organizaciones criminales, las mismas que pueden durar 6 años, en los cuales pueden surgir datos de nuevos imputados, contra los cuales quedaría un año para que la fiscalía pueda hacer el requerimiento respectivo" (pp. 3-7).

Lo expresado en la exposición de motivos del proyecto de ley analizado es claro; en sencillo, se busca ampliar el plazo de conservación de información que tienen a su cargo las empresas de telecomunicaciones bajo supervisión del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), esto debido a que la carga procesal

asumida tanto por el Ministerio Público como el Poder Judicial no permite que el plazo actualmente establecido en la norma que se busca reformar apoye o vaya conjuntamente al progreso de investigaciones penales en supuestos específicos como aquel de los altos funcionarios públicos.

Como se puede observar, el artículo 36 del Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, Reglamento de la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, establece como plazo general para la conservación de los datos dos (2) años contado desde la finalización del último encargo realizado, el cual se entendería debe contarse de forma reiterada en la contratación de servicios de telecomunicaciones, cada vez que se contrata, asumiendo que el número de teléfono es un dato personal que hace identificable a una persona determinada.

No obstante, este artículo no es aplicable a los registros de llamadas y facturación de los servicios que explotan las empresas supervisadas por el OSIPTEL, ya que el supuesto regulado en el artículo 16 de la Ley 27336, Ley de desarrollo de las funciones y facultades del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) es específico y especial.

En el sentido antes expresado, es correspondiente, para los fines perseguidos por la iniciativa legislativa, modificar esta última norma.

Respecto a los fundamentos de la modificación de un plazo de tres (3) años a siete (7) años para la conservación de la información específica de los servicios de telecomunicaciones respecto a registros de llamadas y facturación de los servicios que explotan las empresas supervisadas por el OSIPTEL, observamos que existen dos situaciones que se han detectado, conforme la exposición de motivos:

- Primero, tenemos los casos de las investigaciones penales conducidas por el Ministerio Público. En estas investigaciones, se recurre al levantamiento de las comunicaciones y telecomunicaciones conforme a las reglas de la normativa procesal penal. Estos actos, requieren petición fiscal al juez de investigación preparatoria, quien recién ordena el levantamiento del secreto de las comunicaciones del sujeto activo del delito o del titular de un número telefónico vinculado a los delitos, permitiendo conocer la información que está registrada en las bases de datos de las empresas de telefonía. Transcurrido el plazo establecido actualmente en la Ley, los datos son eliminados; es decir, se genera un perjuicio a las investigaciones antes indicadas, las cuales actualmente tienen plazos que exceden el que está establecido a la fecha.

Ahora bien, los datos complementarios como registros de llamadas y facturación son útiles en las investigaciones fiscales porque permiten constituir prueba a utilizase en los procesos penales, incluso sin necesidad de tener acceso a su contenido. Por tanto, si luego de la verificación de los datos de contenido de llamadas obtenidas por intervención judicial no se encuentra nada relevante o muy explícito, la información que regula la ley que se quiere modificar es la única herramienta con la que cuentan los fiscales de nuestro sistema jurídico.

- Segundo, descrito de forma más explícita en la exposición de motivos, tenemos los casos de investigación de altos funcionarios, donde según la experiencia previa puede transcurrir un plazo de cinco (5) años o más en los cuales los Congresistas o el Presidente de la República por diversos motivos, en su mayoría subjetivos o interpretativos, se puede postergar el tiempo sin una acusación constitucional, imposibilitando que se realicen las diligencias necesarias para la obtención de pruebas, ya sea para una acusación a nivel constitucional o una de carácter penal; por tanto, el limitado plazo establecido genera un obstáculo a la obtención de los datos referidos sobre las telecomunicaciones de los investigados.

Por ello, pese a que claramente se refleja un costo para las empresas supervisadas, el interés público sí llega a ser fundamento constitucional válido, incluso, para restringir derechos en casos concretos[6], como el que venimos analizando. La labor que cumplen tanto la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial es de interés público de toda la población; de esta forma, no es posible impedir un cambio de mejora en las herramientas de seguridad a favor del sistema de justicia, en virtud a que se generen costos de adecuación a la normativa por parte de las empresas supervisadas por el OSIPTEL.

Ahora bien, yendo un poco más allá de la exposición de motivos, existen en la actualidad diversos procedimientos administrativos a cargo de entidades públicas que también pueden solicitar intervención de telecomunicaciones a través de colaboración judicial; por tanto, no sólo se resguarda el cumplimiento de los fines del proceso penal, sino que también se complementan los fines de los distintos procedimientos administrativos.

De esta forma, podemos llegar a la conclusión de que el proyecto de ley evaluado es válido y está sustentado correctamente, ya que persigue la finalidad de resguardar datos o información valiosa para los procedimientos administrativos o proceso judiciales que persiguen, tutelar bienes jurídicos valiosos para el ordenamiento.

---

[6] BARAK, Aharon – "Proporcionalidad. Los derechos fundamentales y sus restricciones". Lima: Palestra, 2017.

Entonces, luego de la evaluación técnica, podemos indicar que con el presente documento se recomienda la aprobación del proyecto de ley presentado.

IV.2 Análisis sobre la necesidad, viabilidad y oportunidad de la propuesta legislativa

La presente iniciativa legislativa es necesaria, pues la realidad de los procedimientos administrativos, procedimientos parlamentarios y procesos judiciales demuestran el exceso de tiempo en investigación y, mucho más, en la solución de los mismos; en este sentido, el plazo establecido en el inciso e) del artículo 16 de la Ley 27336, Ley de desarrollo de las funciones y facultades del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) se ve superado y se convierte, en los hechos, en un obstáculo para el desarrollo de los procedimientos y procesos antes indicados.

De esta forma, el proyecto que se analiza permite dar un más amplio plazo para la conservación de los datos de registros de llamadas y facturación que mantienen las empresas supervisadas por el OSIPTEL, para con ello fortalecer y permitir la conservación y resguardo de información valiosa para las investigaciones administrativas, parlamentarias y penales.

La presente iniciativa legislativa es viable, ya que, como hemos evaluado en el presente documento, existe fundamento constitucional y legal para la emisión de normas del sector telecomunicaciones en general, incluyendo medidas que refuercen los instrumentos a favor de los derechos de justicia de los ciudadanos y, además, del funcionamiento correcto del sistema de justicia en el ordenamiento jurídico peruano.

Además, la iniciativa legislativa está enmarcada en la coordinación de las normas especiales existentes en materia de telecomunicaciones con la actuación y desenvolvimiento del sistema de justicia; debemos recordar que las normas instrumentales sobre material probatorio, medios de prueba y sucedáneos es y debe servir al sistema de justicia. Por lo antedicho, la modificación propuesta es viable en nuestro ordenamiento.

La presente iniciativa legislativa es oportuna, porque cada día surgen nuevos casos de investigación en contra de altos funcionarios; en este sentido, siendo uno de los focos de concentración para la modificación, estamos ante una oportunidad de corregir el establecimiento de un plazo que se ha vuelto obstructivo frente a la posibilidad de investigar los hechos ocurridos en cada caso, dentro de procedimientos administrativos, parlamentarios y penales.

IV.3 Análisis del marco normativo y efecto de la vigencia de la norma

De acuerdo con lo señalado en el artículo 79 de la Constitución Política del Perú, en concordancia con lo establecido en el artículo 76 del Reglamento del Congreso de la República, cumple con lo señalado en las normas legales antes citadas y no contraviene la Constitución Política del Perú, ni ninguna norma legal peruana, en este aspecto.

IV.4 Análisis de las opiniones e información solicitadas

Opiniones solicitadas

Entidad consultada	N° de Oficio	Fecha	Respuesta
Ministerio de Transportes y Comunicaciones	Oficio 767-2021-2022-CTC/CR	11 de marzo de 2022	Oficio 0959-2022-MTC/04 13 de abril de 2022
Fiscal de la Nación	Oficio 768-2021-2022-CTC/CR	11 de marzo de 2022	Oficio 003031-2022-MP-FN-SEGFIN 23 de junio de 2022
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL)	Oficio 769-2021-2022-CTC/CR	11 de marzo de 2022	Oficio C. 00048-PD/2022 31 de marzo de 2022
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)	Oficio 770-2021-2022-CTC/CR Oficio 990-2021-2022-CTC/CR	11 de marzo de 2022 20 de abril de 2022 (reiteración)	
Municipalidad Metropolitana de Lima	Oficio 770-2021-2022-CTC/CR	11 de marzo de 2022	

	Oficio 990-2021-2022-CTC/CR	20 de abril de 2022 (reiteración)	

Análisis de las opiniones recibidas

En primer lugar, el Oficio N° 0959-2022-MTC/04, de fecha 13 de abril de 2022, suscrito por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, contiene el Informe N° 458 -2022-MTC/08 de la Oficina General de Asesoría Jurídica, en el cual se concluye que "*(...) no es competente para emitir opinión sobre el Proyecto de Ley 1418/2021-CR, 'Ley que obliga a las empresas de telefonía conservar por un periodo de al menos 7 años los registros de llamadas'*" (p. 9).

Sin perjuicio de ello, la Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones, en Informe N° 0219-2022-MTC/26.02, adjunto al oficio en referencia, hizo los siguientes comentarios:

> *"(...) consideramos que la propuesta normativa no permitiría conseguir la información necesaria para la investigación debido a que, como también se ha señalado en el proyecto de ley, el Ministerio Público no puede accionar en forma directa contra aquellos que tienen la prerrogativa del antejuicio, la misma que dura hasta 5 años después de haber dejado el cargo; es decir, mientras ellos estén dentro de este plazo es necesario que el Pleno del Congreso de la República apruebe la decisión de acusar al funcionario para que la denuncia pueda ser formalizada. Por lo cual, los altos funcionarios públicos tendrían un periodo de proyección de hasta diez años, superior a los 7 años que propone el proyecto de ley.*
>
> *Si bien se señala que al establecer un plazo de resguardo de los datos que supere al menos el periodo de estos funcionarios, es decir 5 años, se podría autorizar la investigación debido al ingreso de nuevos actores políticos, consideramos que ello, resulta poco probable debido a que en los últimas elecciones, del periodo 2001-2021, se ha observado que los partidos políticos mantienen su poder en el Congreso, medido como la proporción de congresistas, en dos periodos legislativos consecutivos, que hacen en conjunto un periodo de 10 años, superior a los 7 años propuestos.*
>
> *(...)*
>
> *Por otro lado, en relación a delitos perpetrados por imputados integrantes de organizaciones criminales, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma, se señala que si bien la propuesta normativa permitiría la obtención de*

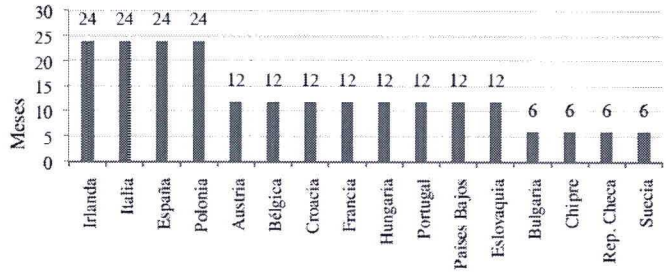
información necesaria para el Ministerio Público, consideramos que la exposición de esta problemática no se encuentra del todo fundamentada al no contarse con cifras que permitieran dimensionar el tamaño del problema, esto es, de la proporción de casos donde las investigaciones son prorrogadas. Esto resulta importante debido a que la conservación de la información representa un costo para la sociedad en la medida en que se pone en riesgo la privacidad de la población y por los costos en los que incurren los operadores de telecomunicaciones, a fin de contar con la infraestructura necesaria para albergar la información de los diferentes usuarios y por los diferentes tipos de información (llamadas y facturación).

Cabe señalar que, la regulación internacional sobre la conservación de datos de telecomunicaciones ha consistido en establecer plazos relativamente cortos, ente 6 meses y dos años, debido a la gran importancia que se brinda a la protección de los datos personales de la población. Asimismo, como se mostrará, en el caso de América Latina, las propuestas para incrementar los plazos de conservación de los datos no prosperaron por considerarse desproporcionadas.

Según se muestra en el Gráfico 2, en los países europeos 4 se han establecidos plazos de conservación de datos de comunicaciones entre 6 y 24 meses, a partir de la fecha de la comunicación, consistente con lo señalado en el artículo 6 de la Directiva N° 2006/24 de la Unión Europea, que fue adoptada para armonizar los regímenes de conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones.

Posteriormente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en su sentencia del caso Digital Rights Ireland de abril de 2014 declaró inválida la Directiva N° 2006/24 por considerarlo como un ejercicio desproporcionado de la Unión Europea en violación de los artículos 7, 8 y 52 (1) de la Carta de los Derechos. Fundamentales de la UE, luego de reconocer que 'the persons whose data have been retained [must] have sufficient guarantees to effectively protect their personal data against the risk of abuse and against any unlawful access and use of that data'. Finalmente en diciembre de 2016, el TJUE en el caso Tele-2/Watson reafirmó y expandió lo señalado en el caso Digital Rights Ireland (Privacy International, 2017).

Gráfico 2: Periodo de retención (en meses) de datos de telecomunicaciones en países europeos



Fuente: Privacy International (2017). Elaboración: DGPRC-MTC.

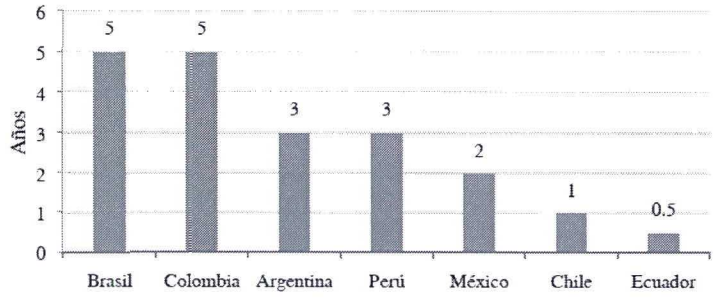
En este caso, el TJUE consideró que la conservación de datos es una herramienta valiosa para las investigaciones criminales. Por lo cual, la conservación de datos personales constituye un medio apropiado para alcanzar el objetivo perseguido por la directiva. No obstante, en cuanto a la necesidad de la conservación de datos, el TJUE señaló que la Directiva de Conservación de Datos (Cullen International):

- *No proporciona a las personas "garantías mínimas" para proteger eficazmente sus datos personales contra el riesgo de abuso o acceso ilegal a esos datos. El TJUE señala que la directiva entra en conflicto con los derechos fundamentales de prácticamente toda la población europea;*
- *No establece límites ni condiciones que regulen el acceso de las autoridades nacionales competentes a los datos y su posterior uso. Por el contrario, la directiva deja a los estados miembros definir los procedimientos/condiciones que rigen el acceso a los datos retenidos. Además, el acceso a los datos retenidos no está sujeto a "una revisión previa realizada por un tribunal o por un organismo administrativo independiente";*
- *Finalmente, en relación al plazo de conservación de los datos señala que no contiene criterios objetivos para determinarlo (entre un mínimo de seis meses y un máximo de dos años).*

En base a lo anterior, el TJUE concluye que la Directiva de Conservación de Datos no contiene las disposiciones que garanticen que la injerencia en el derecho fundamental se 'limite a lo estrictamente necesario" para luchar contra la delincuencia. El TJUE añade que la directiva no garantiza "que los proveedores de comunicaciones electrónicas apliquen un nivel particularmente alto de protección y seguridad', ni garantiza 'la destrucción de los datos al final del período de conservación de datos'.

Por otro lado, en los países de América Latina 5 se han establecido plazos menores a 5 años, con un promedio de 3 años como lo establecido en el Perú (véase Gráfico 3). Sólo en Brasil y Colombia el periodo de conservación es de 5 años, mientras que en el resto de países es menor a 3 años, con un mínimo de 6 meses en Ecuador.

Gráfico 3: Periodo de conservación (en años) de datos de telecomunicaciones en países de América Latina



Fuente: Díaz, Marianne (2019). Elaboración: DGPRC-MTC.

Al respecto, como se señaló, han existido iniciativas para incrementar los periodos de conservación del registro de tráfico de sus comunicaciones, como son los casos de Argentina y Chile. No obstante, en ninguno de los casos las propuestas procedieron.

En el caso de Argentina, el Reglamento de calidad de los servicios de telecomunicaciones contemplaba la obligación de garantizar la conservación de los datos por un mínimo de tres años. Posteriormente, se publicó la Ley N° 25.873 y su reglamento con lo cual se dispuso conservar los datos filiatorios y domiciliarios de sus clientes, así como los registros de tráfico de sus comunicaciones y sistematizarlos hasta por un plazo de diez años. Sin embargo, esta norma fue declarada inconstitucional por violar los principios de necesidad, legalidad y proporcionalidad (Díaz, 2019).

En el caso de Chile, el artículo 222 del Código Procesal Penal establece que las empresas de telecomunicaciones están obligadas a almacenar los números IP de las conexiones que realicen sus abonados por un plazo no inferior a un año. Posteriormente, en el 2017, se publicó el Decreto N° 866 que establecía entre otras cosas, que los datos comunicacionales debían ser almacenados por un plazo no menor a dos años, superior al contemplado en ley. No obstante, la Contraloría General de la República resolvió abstenerse de dar curso a dicho decreto debido a que: dicho decreto no se habría ajustado a derecho, puesto que una parte de sus disposiciones buscaban regular materias propias de ley, como las relativas a la conservación de datos comunicacionales por parte de los prestadores de servicios, y las atribuciones de los jueces de garantía y el Ministerio Público, excediendo las normas del Código Procesal Penal, entre otros puntos (…).

En base a lo expuesto, el proyecto normativo no permitiría alcanzar el objetivo planteado de poder contar con datos que permitan investigar a los altos funcionarios públicos y que para hacerlo se requeriría de ampliar el periodo de conservación

propuesto. En relación a la problemática de los delitos perpetrados por imputados integrantes de organizaciones criminales, no se encontraría fundamentada al no contarse con cifras que permitan dimensionar su magnitud, que contrapese el costo que representa para la sociedad la conservación de los datos de llamadas y facturación de la población, en la medida en que se pone en riesgo la privacidad de su información, así como los costos en los que incurren los operadores de telecomunicaciones, a fin de contar con la infraestructura necesaria para albergar la información de los diferentes usuarios y los diferentes tipos de información (llamadas y facturación).

Por lo tanto, se considera que, el proyecto de norma no pasaría la etapa del test de proporcionalidad, siendo así que el análisis puede quedar en este punto. No obstante, se procede con analizar de manera complementaria la etapa de necesidad." (pp. 16-21).

Si bien la Comisión coincide con los comentarios que realiza el Ministerio sobre otras alternativas frente a la mejora del sistema de justicia, tales como la eliminación de la inmunidad de altos funcionarios o modificar la entidad encargada de la inmunidad de altos funcionarios; no es posible incluir dichas iniciativas en el presente proyecto de ley y sugerimos que se presenten individualmente, para que sean asignadas a la Comisión correspondiente, ya que la Comisión de Transportes y Comunicaciones no es competente para analizar las mismas.

En lo que se refiere a los comentarios sobre la propuesta referida a telecomunicaciones, resaltamos que el Ministerio haya hecho la comparación a nivel mundial y latinoamericano sobre los plazos de retención de información; no obstante, el proyecto de ley ha sido claro al indicar que se trata de un supuesto muy particular que tiene el ordenamiento jurídico peruano al justificarse ello en virtud de la carga procesal y la demora en los plazos que tienen el Ministerio Público y el Poder Judicial en nuestro país, añadiéndose el particular procedimiento de investigación realizado por el Congreso de la República.

De esta manera, la Comisión no considera que la comparación de plazos sea determinante para el establecimiento del mismo en nuestro ordenamiento. De igual forma, la realización del test de proporcionalidad realizado por el Ministerio no deja claro que la idoneidad de la medida propuesta haya sido contradicha, ya que la modificación propuesta efectivamente logrará la medida deseada; por su parte, tampoco el análisis de la necesidad llegaría a desvirtuar la propuesta, en tanto las otras medidas son todas indirectas que no necesariamente llevarán al mismo resultado.

En segundo lugar, la N° 00048-PD/2022, de fecha 31 de marzo de 2022, suscrita por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), contiene

el Informe N° 108-OAJ/2022 de la Oficina de Asesoría Jurídica del OSIPTEL, lleva una opinión desfavorable al presente proyecto de ley en virtud de lo siguiente:

> *"(…) con relación a la ampliación del período de almacenamiento de la información que esté registrada en las bases de datos de las empresas de telefonía por un periodo de 7 años con el objetivo que sirva para las investigaciones a cargo del Ministerio Público, es preciso señalar que, dicha información podría no resultar idónea para acreditar un ilícito, en tanto consiste en el registro o detalle de las llamadas, mas no su contenido. Al respecto, si bien podría resultar indiciaria y complementaria para alguna investigación, es importante que, en principio, se conozca el alcance de la misma.*
>
> *Asimismo, se aprecia que, la Exposición de Motivos hace referencia a casos de investigaciones fiscales contra altos funcionarios públicos e investigaciones por delitos perpetrados por imputados integrantes de organizaciones criminales, entre otros, cuyos plazos son extensos y superiores a cinco años, lo cual ameritaría ampliar el período mínimo de conservación de información. No obstante, el alcance de la modificación planteada es aplicable a todo el mercado de telecomunicaciones, el cual excede ampliamente el ámbito del problema identificado, por lo que se sugiere evaluar dicho extremo.*
>
> *Adicionalmente, es necesario mencionar que, las disposiciones contenidas en el Proyecto de Ley representarían para las empresas operadoras la obligación de conservar un volumen considerable de información toda vez que, por cada año o cada periodo de tiempo, se almacena el detalle de llamadas de su planta de usuarios fijos y móviles, lo cual representa un costo importante para la empresa operadora considerando los factores antes mencionados (infraestructura de almacenamiento adicional, por ejemplo). Por tal motivo, es importante considerar la relevancia de generar una adecuada regulación ya que, aquellos sobrecostos que recaigan en la empresa operadora, podrían posteriormente, ser trasladados a la tarifa aplicada al usuario."* (p. 4).

En este caso, la Comisión discrepa de la opinión de OSIPTEL en sus observaciones, ya que en ningún caso la sola existencia de costos para el sector privado para adecuarse a una medida legislativa o reglamentaria que busca proteger un valor jurídico en aras del bienestar público puede ser justificación para no emitir una norma específica.

Igualmente, si bien es cierto lo indicado por OSIPTEL cuando señala que la información materia de la obligación que se busca modificar "*(…) podría no resultar idónea para acreditar un ilícito, en tanto consiste en el registro o detalle de las llamadas, mas no su contenido*" (p. 4), creemos que es más rescatable lo que sigue en su razonamiento cuando

indican que "*(...) podría resultar indiciaria y complementaria para alguna investigación, es importante que, en principio, se conozca el alcance de la misma*" (p. 4).

De esta forma, se reconoce que la información materia de la obligación brinda respaldo a información que puede ser de utilidad tanto para el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Congreso de la República, la Contraloría y otros entes administrativos que están involucrados en las investigaciones de *ius puniendi* del Estado.

Como indica Pisfil, queda claro que las pruebas indiciarias son muy importantes, dentro de ellas la información que resguardan las entidades supervisadas por OSIPTEL, tal como sigue:

> "*[queda clara] la relevancia que tiene la prueba indiciaria en nuestro proceso penal actual, la cual tiene dos incidencias básicas –si la queremos utilizar– las cuales son las siguientes: la primera, que exige un raciocinio más elaborado, la cual debe ser manifestado debidamente en el fallo condenatorio, reforzando de tal modo, el derecho-principio a la motivación de las resoluciones judiciales; por otro lado, nos sirve para resolver casos complejos donde resulta difícil conseguir una prueba eminente, categórica (directa), teniendo solo datos periféricos, circunstanciales, contextuales, entre otros*"[7].

De esta forma, la Comisión considera los fundamentos de OSIPTEL, pero no comparte la opinión desfavorable en el sentido de que cualquier medida a favor del sistema de justicia, que tantos problemas tiene, desde el sector de telecomunicaciones es viable y debería implementarse si brinda, como es el caso, una herramienta a favor de los operadores jurídicos.

En tercer lugar, la Carta N° 045-2022, de fecha 17 de marzo de 2022, suscrita por la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), contiene observaciones al proyecto de ley presentado, indicando –al igual que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones- que a nivel comparado el plazo de conservación de la información es menor al que se propone; además, indica expresamente lo siguiente:

> "*Si bien reconocemos la importancia de colaborar con las autoridades en los procesos de investigación de delitos, lo que se concreta diariamente a través del acceso a información relacionada a las comunicaciones, incluyendo geolocalización, creemos que no se ha evaluado realmente el impacto que éste tiene en los consumidores y su poca efectividad*" (p. 1).

---

[7] PISFIL, Daniel – "La Prueba Indiciaria y su relevancia en el Proceso Penal". En: Revista de la Maestría en Derecho Procesal. Vol. 5, 1. Lima: Programa de Maestría en Derecho Procesal Penal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014, p. 143.
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoprocesal/article/view/119-147/10825

En este sentido, esta institución ha formulado una propuesta de redacción de la norma, dejando de lado su opinión en contra de la ampliación del plazo, con dos puntos:

- Primero, la eliminación de la frase "al menos" de la fórmula actual; lo cual la Comisión encuentra pertinente en virtud a que el plazo cambiado es lo suficientemente largo como para exigir legalmente mayores tiempos facultativos.

- Segundo, añadir la frase "*Culminado dicho periodo, las empresas operadoras realizarán las acciones para eliminar la mencionada información*", la cual se procede a añadir con el texto técnico a la propuesta; siempre dejando cualquier otra norma específica sobre que indique lo contrario en las normas del sistema de justicia.

Finalmente, el Oficio N° 003031-2022-MP-FN-SEGFIN, de fecha 23 de junio de 2022, suscrita por Ana María Velarde Roa, Secretaria General de la Fiscalía de la Nación, que adjunta el Informe N° 000040-2022-MP-FN-GAFN, elaborado por el Gabinete de Asesores de la Fiscalía de la Nación que contiene la opinión institucional respecto del Proyecto de Ley 1418-2021-CR que indica que:

La Exposición de Motivos Proyecto de Ley 1418/2021-CR, señala que el contenido de los datos e información que el derecho al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones guarda, con el avance de la tecnología en las telecomunicaciones y la masificación de las comunicaciones, por aparatos móviles o teléfonos celulares, la privacidad de los mensajes que se transmiten por este medio, son utilizados como una herramienta para la comisión de diferentes delitos; y como contraparte, su legal intervención es una técnica fundamental en la lucha contra la delincuencia común y organizada conforme a las reglas del Decreto Legislativo N° 957, Decreto Legislativo que promulga el nuevo Código Procesal Penal del año 2004.

Asimismo, ante una comisión delictiva, El Ministerio Público es el encargado de conducir desde su inicio la investigación del delito, para lo cual solicita el requerimiento de levantamiento de las comunicaciones, bajo las reglas del nuevo Código Procesal Penal de 2004, concordante con la Constitución Política del Perú. Este requerimiento fiscal deberá ser aprobado por el juez, quien ordenará el levantamiento de las comunicaciones del sujeto activo del delito o del titular de un número telefónico vinculado a un hecho criminal, ello permitirá conocer la información que se encuentra registrada en las bases de datos de las empresas de telefonía, la misma que puede estar almacenada por un mínimo de 3 años, transcurrido el cual puede ser eliminada, y con ello se perjudicaría las investigaciones que cuenten con plazos más largos para su procesamiento.

En la citada norma, se resalta también, que el plazo de los 3 años es insuficiente, tratándose de acusaciones constitucionales contra altos funcionarios públicos – según lo descrito en el artículo 99 de la Constitución Política del Perú – ya que la Fiscalía no puede accionar directamente contra ellos, pues cuentan con la prerrogativa del antejuicio. La excepción es el Presidente de la República, a quien sólo se le podrá acusar según lo previsto en el artículo 117 de la Constitución. La decisión de acusarlo constitucionalmente merece un acuerdo de la mitad más uno del número de miembros del Congreso, sin participación de los miembros de la Comisión Permanente, ergo, sin acuerdo, no se procede con la acusación.

La negativa para investigar al Presidente de la República, podría ocasionar el retardo en los actos de averiguación de la verdad y la demora en la recolección de datos pertinentes. Es necesario establecer un plazo de resguardo de datos que supere al menos el periodo de estos funcionarios, a cuyo término con el ingreso de nuevos actores políticos se pueda autorizar la investigación.

Aunado a ello, refiere que las investigaciones por delitos perpetrados por integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a esta, o que aquellas que actúan por encargo de la misma, tienen un plazo de investigación preparatoria de 36 meses, la cual puede ser prorrogada por un plazo similar, lo que podría durar hasta 6 años. En este tiempo podrían surgir nuevos investigados, que no eran de conocimiento en un inicio, por lo que, la afectación de su derecho al secreto de las comunicaciones proporcionaría datos a la investigación; sin embargo, esta medida sería inútil, si el plazo legal es de 3 años, pues las empresas de telefonía ya habrían eliminado dicha data.
En muchos casos los delitos se descubren muchos años después de haber sido ejecutados, con lo cual se complica el acopio probatorio de las Fiscalías.

Es por ello que, la ampliación del plazo de conservación de los registros a los que se refiere el literal e) del artículo 16 de la Ley 27336, resulta necesaria ya que la iniciativa busca concordar el plazo de conservación de datos a los que están obligadas las empresas prestadoras de servicios en telecomunicaciones respecto a las investigaciones contra altos funcionarios y organizaciones criminales, en virtud de la averiguación de la verdad. En consecuencia, el plazo de 3 años no es concordante con las situaciones antes descritas, por lo que, esta modificación del plazo permitirá mantener por más tiempo los datos que, podrían servir en las investigaciones que realiza el Ministerio Público y otras instituciones.

Es necesario indicar que, la Comisión de Transportes y Comunicaciones, no comparte lo indicado sobre que la obligación de guardar esta información por parte de los entes supervisados por el OSIPTEL vulnera derechos de los consumidores y usuarios, ya que

esta información solo es referencial y se encuentra protegida, precisamente, por la normativa de protección de datos personales y el Código de Protección al Consumidor, cuerpos normativos que establecen previsiones para que los entes supervisados por el OSIPTEL no exhiban esos datos a menos que se requiera por autoridad competente.

De esta forma, las opiniones recibidas presentan puntos rescatables que han permitido modificar la fórmula legislativa, generando la posibilidad de implementar en la propuesta mejoras en torno a la propuesta legislativa presentada originalmente.

IV.5 Análisis costo beneficio

El presente documento permite analizar los costos y beneficios que conllevaría la aprobación de la iniciativa de ley contenida en el mismo; en ese sentido, se presenta el análisis costo – beneficio frente a los actores sociales que supondría la aprobación del proyecto de ley:

Actores	Beneficios	Costos
Población	• Se incrementará el periodo de almacenamiento de los registros fuentes del detalle de las llamadas que son almacenados por las entidades supervisadas por OSIPTEL para ser utilizadas en las investigaciones a funcionarios públicos y particulares. • Se esclarecerán los enlaces telefónicos que tuvieron los funcionarios públicos y particulares investigados hasta por 7 años, ello con el fin de la lucha contra la corrupción y seguridad ciudadana. • Se facilitará la información del detalle de las llamadas para casos de altos funcionarios quienes desempeñan cargos por	

	un periodo mayor al actual límite establecido por la Le 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL).	
Empresas		• Se deberá asumir costos en material para almacenar datos por parte de las entidades supervisadas por OSIPTEL.
Estado	• Se facilitará la obtención de datos dentro de las investigaciones del Ministerio Público al establecer un periodo más extenso para la conservación de los registros de llamadas. • Se facilitará la obtención de datos dentro de las investigaciones del Poder Judicial al establecer un periodo más extenso para la conservación de los registros de llamadas. • Se facilitará la obtención de datos dentro de las investigaciones de los entes de fiscalización del Congreso de la República al establecer un periodo más extenso para la conservación de los registros de llamadas.	

	Se facilitará la obtención de datos dentro de las investigaciones de la Contraloría y demás entes de administración pública con capacidad de instrucción al establecer un periodo más extenso para la conservación de los registros de llamadas.	

IV.6 Vinculación con la Agenda Legislativa y las Políticas del Estado del Acuerdo Nacional

Recogemos lo expresado en el proyecto de ley presentado, la cual indica a la letra lo siguiente:

"La iniciativa legislativa propuesta tiene relación directa con la siguiente (sic) Política de Estado y Agenda Legislativa del Acuerdo Nacional:

- *Política de Estado N° 8: Descentralización política, económica, y administrativa para propiciar el desarrollo integral, armónico y sostenido del Perú.*
- *Política de Estado N° 21: Desarrollo en infraestructura y vivienda.*
- *Política de Estado N° 35: Sociedad de la Información y sociedad del conocimiento."*

V. CONCLUSIÓN

Por lo expuesto, la Comisión de Transportes y Comunicaciones, de conformidad con el literal b) del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la **APROBACION** del Proyecto de Ley 1418/2021-CR, con el siguiente:

TEXTO SUSTITUTORIO

DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 1418/2021-CR, POR EL QUE SE MODIFICA EL LITERAL E) DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 27336, LEY DE DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y FACULTADES DE OSIPTEL.

LEY QUE MODIFICA EL LITERAL E) DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 27336, LEY DE DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y FACULTADES DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES – OSIPTEL

Artículo único. Modificación del literal e) del artículo 16 de la Ley 27336, ley de desarrollo de las funciones y facultades del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL

Se modifica el literal e) del artículo 16 de la ley 27336, bajo los siguientes términos:

"**Artículo 16.- Obligaciones de las entidades supervisadas**

Las entidades supervisadas se encuentran obligadas a:

(...)

e) Conservar por un periodo de **siete (7)** años después de originada la información realizada con la tasación, los registros fuentes del detalle de las llamadas y facturación de los servicios que explota y con el cumplimiento de normas técnicas declaradas de observancia obligatoria en el país por una autoridad competente, o de obligaciones contractuales o legales aplicables a dichos servicios. **Culminado dicho periodo, las empresas operadoras realizan las acciones para eliminar la mencionada información. Salvo que exista mandato judicial que disponga lo contrario.**

(...)."

Salvo mejor parecer,
Dese cuenta.
Sala de Comisión.

Lima, 21 de setiembre de 2022.

MIEMBROS TITULARES



1. ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL
Presidente
(Acción Popular)

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: ARAGON CARREÑO Luis Angel FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23/09/2022 15:26:54-0500

DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 1418/2021-CR, POR EL QUE SE MODIFICA EL LITERAL E) DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 27336, LEY DE DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y FACULTADES DE OSIPTEL.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: OLIVOS MARTINEZ Leslie Vivian FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 04/10/2022 16:53:44-0500



2. SALHUANA CAVIDES, EDUARDO
Vicepresidente
(Alianza para el Progreso)

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: SALHUANA CAVIDES Eduardo FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23/09/2022 17:38:09-0500



3. OLIVOS MARTÍNEZ, LESLIE VIVIAN
Secretaria
(Fuerza Popular)



4. AMURUZ DULANTO, JESSICA ROSSELLI
(Avanza País - Partido de Integración Social)

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: BELLIDO UGARTE Guido FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27/09/2022 15:43:13-0500



5. BELLIDO UGARTE, GUIDO
(Perú Libre)

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: AMURUZ DULANTO Yessica Rosselli FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27/09/2022 14:29:10-0500



6. GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO
(Bloque Magisterial de Concertación Nacional)



7. JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO
(Fuerza Popular)



8. MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO
(Somos Perú)

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: GUTIERREZ TICONA Paul Silvio FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30/09/2022 14:36:14-0500



9. MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO
(Perú Libre)

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MONTALVO CUBAS SEGUNDO TORIBIO FIR 16655831 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 04/10/2022 13:22:34-0500

DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 1418/2021-CR, POR EL QUE SE MODIFICA EL LITERAL E) DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 27336, LEY DE DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y FACULTADES DE OSIPTEL.



10. OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA
(Fuerza Popular)

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: PAREDES PIQUE Susel Ana Maria FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30/09/2022 10:13:34-0500



11. PAREDES PIQUÉ, SUSEL ANA MARÍA
(Integridad y Desarrollo)



12. QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL
(Perú Libre)



13. REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL
(Fuerza Popular)



14. RUIZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY
(Alianza para el Progreso)



15. TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR
(Bloque Magisterial de Concertación Nacional)



16. VERGARA MENDOZA ELVIS HERNÁN
(Acción Popular)



17. WONG PUJADA, ENRIQUE
(Podemos Perú)

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: WONG PUJADA Enrique FIR 10621936 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 04/10/2022 15:46:53-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: RUIZ RODRIGUEZ Magaly Rosmery FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03/10/2022 16:48:50-0500

DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 1418/2021-CR, POR EL QUE SE MODIFICA EL LITERAL E) DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 27336, LEY DE DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y FACULTADES DE OSIPTEL.



18. YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA
(Avanza País - Partido de Integración Social)

Firmado digitalmente por: ZEBALLOS APONTE Jorge Arturo FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30/09/2022 17:45:40-0500

Firmado digitalmente por: YARROW LUMBRERAS Norma Martina FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30/09/2022 17:45:40-0500



19. ZEBALLOS APONTE JORGE ARTURO
(Renovación Popular)

MIEMBROS ACCESITARIOS



1. AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO AURELIO
(Fuerza Popular)



2. ALEGRÍA GARCÍA, LUIS ARTURO
(Fuerza Popular)



3. CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE
(Fuerza Popular)



4. CORDERO JON TAY, MARÍA DEL PILAR
(Fuerza Popular)



5. CHACÓN TRUJILLO NILZA MERLY
(Fuerza Popular)



6. GONZA CASTILLO AMÉRICO
(Perú Libre) _____



7. GUERRA GARCÍA CAMPOS, HERNANDO
(Fuerza Popular) _____



8. HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH
(Renovación Popular) _____



9. JUAREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA
(Fuerza Popular) _____



10. QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO
(Bloque Magisterial de Concertación Nacional) _____



11. QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME
(Perú Libre) _____



12. RIVAS CHACARA JANET MILAGROS
(Perú Libre) _____



13. SOTO PALACIOS, WILSON
(Acción Popular) _____



14. TORRES SALINAS, ROSIO
(Alianza para el Progreso) _____



15. TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL
(Alianza para el Progreso) _____



16. ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA
(Fuerza Popular) _____

COMISIÓN TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Periodo Anual de Sesiones 2022-2023
Primera Legislatura

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA
Lima, miércoles 21 de setiembre de 2022

En la ciudad de Lima, siendo las quince horas con 11 minutos del miércoles 21 de septiembre de 2022, desde la Sala 2 "Fabiola Salazar" ubicada en el primer piso del Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre" y a través de la plataforma Microsoft Teams, se reunieron los integrantes de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, bajo la presidencia del señor congresista Luis Ángel Aragón Carreño, con la asistencia de los señores y señoras congresistas titulares: Eduardo Salhuana Cavides; Leslie Vivian Olivos Martínez; Jessica Rosselli Amuruz Dulanto; Guido Bellido Ugarte; Paul Silvio Gutiérrez Ticona; David Julio Jiménez Heredia; Esdras Ricardo Medina Minaya; Segundo Toribio Montalvo Cubas; Auristela Ana Obando Morgan; Susel Paredes Piqué; Wilson Rusbel Quispe Mamani; César Manuel Revilla Villanueva; Magaly Ruiz Rodríguez; Nivardo Edgar Tello Montes; Elvis Hernán Vergara Mendoza; Enrique Wong Pujada y Norma Martina Yarrow Lumbreras y Jorge Zeballos Aponte.

Contando con la presencia del congresista accesitario Alejandro Aguinaga Recuenco.

Con el quorum reglamentario se inició la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Transportes y Comunicaciones para el Periodo Anual de Sesiones 2022-2023.

El presidente inicio la sesión saludando a los congresistas presentes en la sala y a los congresistas que se encontraban en forma virtual.

APROBACIÓN DE ACTA

El presidente señaló que el acta de la Tercera Sesión Ordinaria realizada el pasado miércoles 14 de setiembre del presente año fue remitida electrónicamente a los despachos congresales la misma que puso a consideración a los señores miembros de la comisión para su respectiva aprobación.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: OLIVOS MARTINEZ Leslie Vivian FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05/10/2022 16:40:48-0500

Al no haber ninguna observación y puesta al voto fue aprobada por **UNANIMIDAD** con el voto de los congresistas presentes.

DESPACHO

El presidente señaló que se había remitido vía correo electrónico a los despachos de cada uno de los congresistas miembros de la Comisión de Transportes la relación de documentos ingresados y emitidos, desde el 13 al 20 de setiembre, para su conocimiento y fines.

Asimismo, dio cuenta de los proyectos de ley que han ingresado a la Comisión, siendo estos los siguientes:

- **2986/2022-CR**, LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL Y NECESIDAD PÚBLICA LA ACTIVACIÓN DEL SERVICIO EXPRESS DE AUTO VAGONES DE LA REGIÓN JUNÍN A LIMA

- **2997/2022-CR**, LEY QUE ELIMINA DE FORMA INMEDIATA, EL USO DE LA IMAGEN DE LA MUJER EN PÁGINAS WEB PUBLICADAS CON FINES SEXUALES SIN SU CONSENTIMIENTO

- **3024/2022-CR**, LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL Y NECESIDAD PÚBLICA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QHAPAQ ÑAN Y SU INCLUSIÓN COMO RUTA NACIONAL

- **3048/2022-CR**, LEY DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS EN VEHÍCULOS MENORES, MOTOTAXIS Y SIMILARES

Refirió que los referidos proyectos de ley pasaron a la secretaría de la comisión para que sigan su trámite correspondiente.

INFORMES

El presidente informó que la comisión recibió los siguientes Oficios:

1. Oficio 891-2022-2023-ADP-D/CR, del señor José Francisco Cevasco Piedra, Oficial Mayor del Congreso de la República. Dando a conocer que el Pleno del Congreso, en su sesión realizada el 15 de setiembre de 2022 y con la dispensa del trámite de sanción del acta, aprobó la siguiente modificación en la conformación de la Comisión de Transportes y Comunicaciones:

   - Sale como titular el congresista **Javier Rommel Padilla Romero** a propuesta del grupo parlamentario Renovación Popular.
   - Ingresa como Titular el congresista **Jorge Arturo Zeballos Aponte**, a propuesta del grupo parlamentario Renovación Popular.
   - Ingresa como accesitario el congresista **Wilson Soto Palacios**, a propuesta del grupo parlamentario Acción Popular.

2. Oficio D000188-2022-MIMP-DM, firmado por la señora **Claudia Dávila Moscoso**, Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, remitiendo para conocimiento el Proyecto de Ley **2735/2022-PE,** Ley de reconocimiento del derecho al cuidado y de creación del Sistema Nacional de Cuidados.

   Señaló que el objetivo de esta propuesta legislativa es la de crear el Sistema Nacional de Cuidados y reconocer la importancia de la función social de los cuidados, para el desarrollo de la sociedad y el funcionamiento de la economía del país, así como reconocer el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado con igualdad de género

3. Da cuenta del Informe que remitiera la Municipalidad de caída del Puente Cutinakhaka ubicado en el distrito de Oronccoy, provincia de La Mar en el departamento de Ayacucho sobre el pedido de información que hiciera la comisión respecto a la caída del Puente en el que señalan que el acta se firmo el 30 de agosto de 2021 y a los días se cayo.

Al respecto señaló que se volvería a remitir un oficio a la Municipalidad solicitándole aclaración de la información proporcionada, considerando que los datos proporcionados no son claros para la fiscalización que se viene realizando.

4. Da cuenta sobre la paralización constante que se viene realizando en el Aeropuerto de Juliaca - Puno e informa que el pasado 19 de setiembre ha vuelto a cerrar hasta el 05 de octubre de 2022.

   Señaló que se ha vuelto a solicitar información al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que aclare el porqué del cierre constante del Aeropuerto de Juliaca, cuales son los motivos que se tienen para hacerlo y cuales son los logros que se han tenido con estos cierres.

5. Informó de las actividades que se realizarían en la ciudad del Cusco a partir del 3 al 5 de octubre del presente año, siendo:

   - El 03 se haría una visita al Aeropuerto de Chincheros en el Cusco para ver su real situación, ante los informes que viene recibiendo la comisión;
   - El 04 se realizaría una Audiencia Pública en la ciudad de Cusco, como parte de las actividades descentralizadas programadas por la comisión;
   - El 05 se realizaría la Primera Sesión Ordinaria Descentralizada en la ciudad de Cusco.

   Al respecto señaló que se estaría enviando la invitación correspondiente a los congresistas miembros de la comisión, así como a los congresistas representantes de Cusco.

6. Informó que el día martes 20 de setiembre se tuvo información de la caída de una Avioneta de la empresa Saeta, al despistarse cuando trataba de despegar del aeródromo del distrito de San Antonio del Estrecho en la provincia de Putumayo, región Loreto.

   Al respecto señaló que se pidió información al Ministerio de Transportes del porque de las constantes caídas de estas avionetas, el control que realizan, su mantenimiento, e igualmente se pidió información al Gobierno Regional de Loreto para que informe que paso realmente con esta avioneta.

7. Finalmente informó que el pasado lunes 19 de setiembre se realizó una Mesa de Trabajo denominada "Problemática de los Controladores Aéreos" la misma que tuvo la participación de los Sindicatos de Controladores Aéreos.

El presidente cedió el uso de la palabra a los congresistas presentes

Congresista Paredes Pique se refirió a la situación del Aeropuerto de Juliaca y se solidarizo con lo dicho por el presidente considerando que dicha ciudad tenía un movimiento comercial al igual que la misma ciudad de Puno, con un movimiento económico muy rico.

Congresista Wong Pujada se refirió al accidente de la avioneta de la empresa Saeta y señaló que igualmente existen estos tipos de accidente en la ciudad de Nazca.

Al respecto **el presidente** señaló que ya se había reiterado pedido de información al respecto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Señaló que en cuanto a la caída del Puente Cutinakhaka ubicado en el distrito de Oronccoy, provincia de La Mar en el departamento de Ayacucho, ya se había remitido un oficio reiterativo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones por cuanto la información recibida no era muy concreta e igualmente a lo referido al cierre del Aeropuerto de Juliaca y que, en cuanto a lo ocurrido con la caída de la avioneta, la comisión estaría vigilante porque estos hechos lamentables no se dejarían pasar y se pediría la información correspondiente, realizando un Control Concurrente.

No hubo más informes por parte de los congresistas presentes

PEDIDOS:

El presidente cedió el uso de la palabra a los congresistas presentes.

Congresista Paredes Pique solicitó reiterar pedido de información al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a fin de que informe claramente del porque tanto lo cierran el Aeropuerto de Juliaca.

Congresista Won Pujada solicitó se oficie al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a los funcionarios de Aeronáutica Civil, a fin de insistir en solicitar

información de cómo se encuentran estos aeropuertos donde funcionan las avionetas, tanto en Nazca como en Iquitos, como por la caída de la avioneta de la Empresa Saeta en el departamento de Loreto.

Congresista Montalvo Cubas, solicito se priorice estudio y dictamen del **Proyecto de Ley 1602/2021-CR**, LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA Y DE INTERÉS NACIONAL URGENTE LA REACTIVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL AEROPUERTO "EL VALOR" DE LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA DISTRITO DE EL MILAGRO EL MISMO QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE ABANDONO, de su autoría, el mismo que ingreso a Tramite Documentario el 04.04.2022 y a la Comisión de Transportes y Comunicaciones el 06.04.2022.

ORDEN DEL DÍA

1.-El **presidente** señaló como **primer punto de la orden el día** se tenia la presentación de los representantes de ENAPU – Empresa Nacional de Puertos S.A, a solicitud de la congresista Obando Morgan, señores: Manuel Alberto Talavera Valdivia – Presidente de ENAPU y a sus acompañantes: Sr. Eduardo Raúl Ulloa Torres- Gerente General y Sr. Oscar Enrique Gómez Castro – Miembro del Directorio, a fin de que informen sobre la situación actual de la empresa.

El presidente les dio la bienvenida y les cedió el uso de la palabra.

En primer lugar, expuso el señor Talavera Valdivia – Presidente de ENAPU quien agradeció la oportunidad de poder dar a conocer la problemática que enfrenta su institución, asimismo agradeció a la congresista Obando Morgan por su apoyo, acto seguido pidió permiso para presentar una diapositiva.

Señaló que ENAPU era una Empresa Nacional de Puertos S.A. y que administra los Puertos de Uso Público de Titularidad del Perú así como brinda servicios como en el Comercio Internacional a Naves de Carga, de Cabotaje y de Pasajeros, y de la Integración Comercial Perú-Bolivia.

Se refirió a la misión de la empresa, la visión estratégica, los problemas encontrados, las perdidas por gastos de personal, a los puertos que administra, los puertos multipropósito, los Terminales de Carga que tienen como los de Ilo, el de carga y de pasajeros como el de Iquitos y el Terminal Portuario de Yurimaguas.

Presento el organigrama de la institución, su elección y señaló que el 21.12.2021, fue el Directorio de FONAFE conformado por 5 Ministros, por Acuerdo N° 003-2021/011-FONAFE, que lo designaron como Presidente del Directorio de ENAPU S.A.

Señaló que esta designación fue propuesta por la Federación Nacional de Trabajadores Portuarios de ENAPU S.A., el 12 de octubre 2021 a través de una Carta dirigida al Presidente de la Republica y al Ministro de Transportes y Comunicaciones, proponiendo una terna para que sean evaluados por FONAFE para ocupar diversos cargos, siendo que el Ministro de Transportes y Comunicaciones solicitó su curriculum vitae para su remisión a FONAFE para su posterior evaluación.

Se refirió al estado económico de la empresa, indicando que desde el año 2011 al 2021 la empresa ha tenido 10 años de pérdidas continuas a pesar de que los ingresos eran en el orden de los 12 millones de soles pero que no cubrían los costos, se refirió a las ventas de los inmuebles realizadas en Trujillo Paracas e Iquitos por un monto de tres millones trescientos treinta y un mil soles, haciendo un total de 10 millones cuatrocientos ochentidos mil soles, señalando que no hubo ingreso operativo que pidió ampliación y que a la fecha solo se ha ejecutado el 40%.

Por otro lado refirió a la nueva estación de pasajeros del Terminal Portuario de Iquitos, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones transfirió la cantidad de S/ 27 MM para su ejecución.

Faltando ejecutar la rampa de ingresos de vehículos, el techo del puente basculante de pasajeros entre otros.

Situación que se ha puesto en conocimiento del Órgano de Control Institucional para las acciones que le competen.

Finalmente refirió que el Directorio ante estas situaciones acordó retirar la confianza del Gerente General, Gerente de Operaciones y Terminales Portuarios, Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica y aceptar las renuncias del Gerente de Administración y del Gerente de Desarrollo de Negocios.

Vacantes, que de acuerdo a las directivas de FONAFE, están siendo cubiertas por encargo, por profesionales de carrera de ENAPU S.A., mientras que por directiva de FONAFE se viene realizando el concurso público para cubrir estas vacantes, a través de una de las empresas inscritas en FONAFE y bajo los procedimientos de FONAFE, los cuales se encuentra en proceso desde hace 60 días hasta la fecha.

El presidente agradeció la participación de los representantes de ENAPU y acto seguido cedió el uso de la palabra a los congresistas presentes.

Intervinieron los congresistas: **Obando Morgan, Paredes Pique y la Presidencia**, coincidiendo en preguntar sobre el nombramiento del Presidente, su falta de experiencia en el rubro, sobre la gestión deficiente en ENAPU en los últimos años, la situación de los terminales como el de ILO, la falta de capacidad para lograr con los objetivos trazados, el porqué de los 10 años de pérdidas continuas, las razones de estas, el sobrecosto del personal, los incentivos tributarios.

El presidente acto seguido le cedió el uso de la palabra al representante de ENAPU señor Talavera Valdivia quien respondió a las preguntas planteadas y solicito a la presidencia el apoyo a fin de que FONAFE apoye el retiro del personal excedente, reincorporado por el Poder Judicial y se les de los incentivos necesarios.

Concluida su participación el presidente lo invito a retirarse de la sala.

2.- **El presidente** señaló como **segundo punto de la orden del día** se tenía la presentación de los representantes de la Unión Nacional de Transportistas del Perú- UNT PERÚ, a solicitud de la congresista Obando Morgan, señores Jose Del Carmen Marchese Quiroz – Presidente de la UNT PERÚ, y los funcionarios: Sra. Teresa Campos Ayala – Presidenta de la UNT Callao; Sr. Julio Chalco Grimarey – Director de la UNT Callao y Sr. Luis Maros Bernal – Gerente de la UNP PERÚ, para tratar el tema de la situación actual de la UNT - Perú.

El presidente les dio la bienvenida y les cedió el uso de la palabra

El señor Marchese Quiroz, Presidente de la UNT Perú saludo a los congresistas presentes e inició su presentación de un PPT.

Señaló la problemática de las rutas de ingreso al Puerto del Callao, al problema de la tercerización de la detección, sanción y cobranza de las multas por infracciones de tránsito, el mismo que desnaturaliza el objetivo de competencia otorgado por el RETRAN a la MPC y que es la Tercerización la que produce muchas inconsistencias operativas en la imputación de infracciones RTRAN.

Se refirió a las Fotopapeletas señalando que existía inconsistencia normativa, a INKAFERRO señalando que existían cámaras de acero corrugado y derivados, infracción anti técnica, colocadas en la entrada y salida de APMTC donde está la balanza de los contenedores de los camiones de carga.

Se refirió a los contenedores y las vías limitadas, como la Av. Bertello, a la competencia desleal, la protección de datos, la prestación de Servicio Estándar.

Señalan la importancia de la aprobación de las Leyes 2453/2021-PE, Ley que modifica el Decreto de Urgencia 012-2019, que establece medidas para fortalecer la Seguridad Vial en la prestación del Servicio de Transporte Público Terrestre de Carga y del Transporte Regular de Personas de Ámbito Nacional, remitido a la Comisión de Economía y Finanzas; y Proyecto de Ley **1672/2021-CR**, Ley que modifica la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, a fin de regular la emisión de normas complementarias a los Reglamentos Nacionales y solicitaron el apoyo para su aprobación.

Finalmente se refirió al cambio de matriz energética, sobretodo lo que pasa con el Gas de Camisea y propuso la emisión de un Proyecto de Ley que declare de interés nacional el Cambio de Matriz Energética hacia Gas Natural a los vehículos del transporte de carga y mercancía que comprenda a su cadena de abastecimiento a nivel nacional; y un programa de Renovación de Flota con Deshuase, dirigido a los pequeños transportistas de carga, con incentivos tributarios y bonos que alcancen en promedio el 25% del precio de venta de un vehículo a GNV o GNL y señalo que esto sería la solución para evitar el tránsito de vehículos que emiten humo.

El presidente, concluida la exposición agradeció la presencia de los representantes de la UNT PERÚ y cedió el uso de la palabra a los congresistas presentes.

Intervinieron los congresistas: **Obando Morgan, Paredes Pique; Wong Pujada y la Presidencia.**

Saludaron la presencia de los representantes de la UNT PERÚ y coincidieron en la necesidad de invitar a las autoridades competentes como son las Municipalidades de la Provincia Constitucional del Callao, quienes son los que emiten las multas para que expliquen la razón de las mismas, revisar el tipo de sanciones que se dan en los diferentes entes del estado como OSITRAN, la ATU, etc, revisar el tema de las horas punta y el lugar de transito permitido para estas unidades, tratar de arreglarlo por horarios y permitir el ingreso por otras vías como son las avenidas Colonial y Venezuela, liberando un poco a la avenida Argentina que al llegar a la Plaza Unión se convierte en hora punta en un cuello sin salida.

El presidente cedió el uso de la palabra al representante de la UNT PERÚ señor Marchese Quiroz para que responda, quien señaló la importancia de dar solución a este problema considerando que, si se hace lo mismo con Chancay, sería terrible, habilitar más vías de acceso para la circulación de este tipo de transporte.

También se refirió al problema del Diesel, los cobros que se vienen dando, saber sobre los subsidios que se les vienen dando con el 40% de devolución de los peajes.

Finalmente pidió el apoyo en la aprobación en el Pleno del Congreso de los Proyectos de Ley citados en la exposición, presentados por el Ejecutivo; **2453/2021-CR**, Ley que modifica el Decreto de Urgencia 012-2019, que establece medidas para fortalecer la Seguridad Vial en la prestación del Servicio de Transporte Público Terrestre de Carga y del Transporte Regular de Personas de Ámbito Nacional, remitido a la Comisión de Economía y Finanzas; y Proyecto de Ley **1672/2021-CR**, Ley que modifica la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, a fin de regular la emisión de normas complementarias a los Reglamentos Nacionales.

El presidente ante lo expuesto por parte de los funcionarios de la UNT Perú acordó formar una Mesa de Trabajo con el Sector Público y Privado para atender la problemática de la Unión Nacional de Transportistas del Perú – UNT -Perú, la misma que fue respaldada por parte de los congresistas presentes.

Solicitó a los representantes de la UNT Perú, remitan por escrito las denuncias planteadas en la sesión a fin de hacer un seguimiento y pedir la información necesaria sobre el particular.

Finalmente, se comprometió a apoyar en priorizar el debate en el Pleno del Congreso de los Proyectos de Ley presentados por el Ejecutivo; **2453/2021-CR**, Ley que modifica el Decreto de Urgencia 012-2019, que establece medidas para fortalecer la Seguridad Vial en la prestación del Servicio de Transporte Público Terrestre de Carga y del Transporte Regular de Personas de Ámbito Nacional, remitido a la Comisión de Economía y Finanzas; y Proyecto de Ley **1672/2021-CR**, Ley que modifica la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, a fin de regular la emisión de normas complementarias a los Reglamentos Nacionales.

3. **El presidente** señaló como **tercer punto de la orden del día** se tenía la sustentación del Proyecto de Ley **1857/2021-CR**, Ley que promueve la inversión en la modernización del Terminal Portuario de Chimbote a cargo de su autora Congresista Lady Camones Soriano.

   El presidente acto seguido saludo la presencia de la congresista Camones Soriano y le cedió el uso de la palabra.

   La congresista Camones Soriano agradeció a la presidencia la oportunidad de dar a conocer el objetivo y la importancia de su propuesta legislativa, la misma que sería un beneficio para la Región Ancash, a la cual representa y pidió permiso para presentar una diapositiva.

4. **El presidente señaló como cuarto punto** de la orden del día, se tenía el debate del predictamen recaído en el Proyecto de Ley **1418/2021-CR**, por el que se por el que se modifica el literal e) del artículo 16 de la Ley 27336, Ley de desarrollo de las funciones y facultades del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL.

   Señaló que el objetivo del presente dictamen es la modificación del inciso e) del artículo 16 de la Ley 27336, Ley de desarrollo de las funciones y facultades del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL),

con la única finalidad de modificar el plazo de conservación previsto por la obligación de las entidades supervisadas por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) de conservar los registros de llamadas y facturación de los servicios que explotan de un periodo mínimo de 3 (tres) años por uno de 7 (siete) años, debido a la importancia de estos datos en las investigaciones realizadas por la Policía Nacional y el Ministerio Público, además de en la solución de los casos que llevan a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial. El mismo que tiene opinión favorable del Ministerio Público y ha sido revisado por la Oficina de Técnica Legislativa del Congreso de la República.

El presidente acto seguido **cedió el uso de la palabra a la congresista Magaly Ruiz Rodríguez,** autora de la iniciativa legislativa quien presento un PPT dando a conocer la importancia de su propuesta.

Acto seguido cedió el uso de la palabra a los congresistas presentes.

No hubo participación por parte de los congresistas presentes.

El presidente sometió al voto la propuesta de Dictamen del proyecto de ley **1418/2021-CR**, por el que se propone la Ley que obliga a las empresas de Telefonía conservar por un periodo de al menos 7 años los registros de llamadas, siendo aprobado por **MAYORÍA** con los votos de los congresistas: Luis Ángel Aragón Carreño; Eduardo Salhuana Cavides; Jessica Rosselli Amuruz Dulanto; Guido Bellido Ugarte; Paul Silvio Gutiérrez Ticona; Segundo Toribio Montalvo Cubas; Susel Paredes Piqué; Wilson Rusbel Quispe Mamani; Magaly Ruiz Rodríguez; Nivardo Edgar Tello Montes; Elvis Hernán Vergara Mendoza; Enrique Wong Pujada y Norma Martina Yarrow Lumbreras y Jorge Zeballos Aponte.

Con la abstención de los congresistas: Leslie Vivian Olivos Martínez; David Julio Jiménez Heredia; Esdras Ricardo Medina Minaya; Auristela Ana Obando Morgan y César Manuel Revilla Villanueva.

5. **El presidente señaló como quinto punto** de la orden del día, se tenía el debate del predictamen recaído en los Proyectos de Ley **1406/2021-CR, 1718/2021-CR y 2489/2021-CR,** que declara de interés nacional el asfaltado de varias carreteras en el departamento de Puno.

Señaló que el dictamen fusionaba los proyectos de ley **1406/2021-CR**, presentado por el grupo parlamentario Acción Popular, a iniciativa del congresista **Jorge Flores**

Ancachi, por el que se declara de preferente interés nacional y necesidad pública el financiamiento y ejecución del asfaltado de la autopista (doble vía) Puno-Desaguadero en el departamento de Puno; **1718/2021-CR**, presentado por el grupo parlamentario Perú Libre, a iniciativa del congresista **Wilson Quispe Mamani,** por el que se declara de necesidad pública e interés nacional el mejoramiento y asfaltado de la carretera Sina-Yanahuaya, en la ruta departamental PU – 109, en las provincias de Sandia y San Antonio de Putina en el departamento de Puno; y **2489/2021-CR**, del grupo parlamentario No Agrupados, a iniciativa del congresista **Oscar Zea Choquechambi**, por el que se propone declarar de necesidad pública y preferente interés nacional la construcción y asfaltado de la carretera internacional Asiruni-Rosaspata-Huayrapata-Ninantaya, en las provincias de Huancané y de Moho en el departamento de Puno.

Manifestó que tiene Opiniones favorables y ha sido revisado por la Oficina de Técnica Legislativa.

El presidente acto seguido cedió el uso de la palabra a los congresistas presentes.

La Congresista Paredes Pique solicito se le informe si dicho Proyecto tenía opinión del MEF y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones

La Congresista Yarrow Lumbreras igualmente solicito se le informe si el Proyecto de Ley tenía opinión del MEF.

El presidente al respecto señaló que efectivamente tanto el Ministerio del Ambiente como el Ministerio de Transportes habían emitido opinión VIABLE y que en cuanto a la respuesta del MEF aún faltaba la respuesta, pese a que se le había reiterado en cuatro ocasiones.

El presidente sometió al voto la propuesta de Dictamen de los proyectos de ley **1406/2021-CR, 1718/2021-CR y 2489/2021-CR,** por el que se propone declarar de necesidad pública y preferente interés nacional la construcción y asfaltado de la carretera internacional Asiruni-Rosaspata-Huayrapata-Ninantaya, en las provincias de Huancané y de Moho en el departamento de Puno, siendo aprobado por **MAYORÍA** con los votos de los congresistas: Luis Ángel Aragón Carreño; Eduardo Salhuana Cavides; Leslie Vivian Olivos Martínez; Jessica Rosselli Amuruz Dulanto; Esdras Ricardo Medina Minaya; Segundo Toribio Montalvo Cubas; Auristela Ana Obando Morgan; César Manuel Revilla Villanueva; Magaly Ruiz Rodríguez; Nivardo

Edgar Tello Montes; Elvis Hernán Vergara Mendoza; Enrique Wong Pujada y Norma Martina Yarrow Lumbreras.

Con la abstención de los congresistas: David Julio Jiménez Heredia; Paul Silvio Gutiérrez Ticona; Susel Paredes Piqué y Jorge Zeballos Aponte.

6. El presidente señaló como **sexto punto de la orden del día,** según agenda se tenía la exposición de los representantes de la Confederación Nacional de Entidades de Servicios Complementarios de Transportes - CONAEST, a solicitud del congresista Alejandro Aguinaga Recuenco, señores Edwrd Giancarlo Suárez Mendoza – Presidente del CONAEST y a los funcionarios señores: Jack Leon Aponte – Secretario; Lino de la Barrera Laca – Asesor Legal; Percy Iparraguirre Martínez – Secretario de Fiscalía y Miguel Valdivia Castrejon – Secretario de Organización, para tratar el tema de la Regionalización del Trámite para la emisión de Licencias de Conducir y las irregularidades en la emisión de dichas licencia por adulteración de huellas.

El presidente les dio la bienvenida y les cedió el uso de la palabra.

El señor Suarez Mendoza – Presidente del CONAEST saludo a los congresistas presentes y agradeció la oportunidad de poder dar a conocer el problema que vienen atravesando.

Señaló que hasta el año 2018, los exámenes médicos se expedían fraudulentamente desde Lima hacia todas las regiones del pais en un tiempo de 30 minutos, y a un costo de S/30.00 soles, 1,000 diarios.

Manifestó que desde la Comisión de Transportes y Comunicaciones se pudo frenar esta mafia disponiendo la regionalización como una medida de control y que los resultados fueron inmediatos.

Señaló que sin embargo con la modificación del Decreto Supremo 011-2022-MTC el Ministerio de Transportes y Comunicaciones vuelve a lo mismo y se elimina la regionalización con un Sistema Antifraude fallido.

Acto seguido intervienen los demás funcionarios mostrando a la mesa pruebas que para ellos era necesario dar a conocer donde se evidencian los fraudes que se cometen por la huella digital para la emisión de licencias de conducir.

Finalizan solicitando a la comisión el apoyo con el fin de solucionar el problema y que la regionalización sea permanente con el fin de asegurar una estabilidad en el Sistema de Emisión de Licencias de Conducir.

El presidente, concluida la participación de los representantes de CONAEST les agradeció su participación y señaló que la comisión consideraba importante resolver el presente problema que afectaba la salud pública y que se haría un seguimiento y vería la salida a este problema porque además SUTRAN debería hacer su labor y que juntos se pueda lograr que la regionalización regrese como estaba antes.

Finalmente, solicitó le remitan por escrito la documentación necesaria para poder realizar las investigaciones ante el Poder Ejecutivo.

CIERRE DE SESIÓN

El presidente, no habiendo más puntos por tratar solicitó la dispensa del trámite de aprobación de acta para ejecutar los acuerdos tomados en la sesión.

Puesta al voto fue aprobada por UNANIMIDAD

Siendo las dieciocho horas con cuarenta y dos minutos se levantó la sesión.

Se deja constancia que la transcripción de la versión grabada de esta sesión es elaborada por el Área de Transcripciones y el audio es registrado por el Área de Grabaciones en Audio y Video del Congreso de la República, los cuales forman parte integrante de la presente acta, prevaleciendo lo expresado según el audio.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: ARAGON CARREÑO Luis Angel FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05/10/2022 13:02:34-0500

LUIS ANGEL ARAGON CARREÑO
Presidente

LESLIE VIVIAN OLIVOS MARTINEZ
Secretaria

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: OLIVOS MARTINEZ Leslie Vivian FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05/10/2022 16:42:08-0500